

EL RECUADRO

Tras las elecciones del pasado mes de julio que dejaron como resultado una complicada aritmética parlamentaria y una fragmentación aún mayor que la previa a los comicios, el largo proceso de negociaciones para conformar una mayoría de apoyo al Gobierno ha finalizado con algunas certezas inquietantes para la economía productiva.

Ya es evidente que entre las prioridades del nuevo Gobierno no están los graves problemas, muchos ya estructurales, que lastran nuestra economía y cuyas consecuencias pueden agravarse si se confirman los augurios de deceleración que ya han lanzado distintos organismos nacionales e internacionales.

El desempleo real, al margen de los artificios semánticos y aritméticos para contabilizarlo, el descontrol del gasto, la merma de productividad, la decreciente competitividad de nuestros productos y servicios, o la sostenibilidad del estado del bienestar, muy especialmente en lo que atañe a las pensiones, no han estado entre los temas centrales de la negociación para conformar el gobierno ni, por supuesto, se han concretado, en las propuestas estrella de la nueva legislatura.

Las negociaciones de los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria y los grandes objetivos que se proponen van por otros caminos, en muchos casos opuestos a los que debería transitar la economía española. Sin embargo, la prosperidad futura del país afronta grandes desafíos que, dependiendo de cómo la política se enfrente a ellos, determinará el progreso de la sociedad y el bienestar de los ciudadanos.

En un momento en el que los factores catalizadores de la recuperación han perdido fuerza, los desequilibrios de la economía española se hacen de nuevo patentes y es más urgente abordar reformas que permitan fortalecer la capacidad de crecimiento económico.

El primero de los problemas que debería afrontar el nuevo gobierno será el de la deuda pública situada en el entorno del 110 por ciento del PIB. Incrementar el gasto público sin primar la inversión en infraestructuras productivas es el peor remedio. Sumar costes de todo tipo y castigar los beneficios de las empresas tampoco contribuye a resolver esa debilidad que compromete nuestro futuro.

Sólo reforzando la productividad y la competitividad del conjunto de la economía y racionalizando la inversión y el gasto públicos será posible acercarse a niveles de deuda razonables y homologables con los países a los que deberíamos aspirar a parecerlos.

El desempleo, además de perjudicar gravemente la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas, es el desequilibrio crónico más duradero de nuestra economía y el que más coste social tiene, especialmente entre los jóvenes y para los que afrontan la última etapa de su trayectoria laboral. La senda ya iniciada de las contrarreformas laborales para volver a la rigidez, y el incremento de las cargas que castigan la creación de empleo son las peores soluciones para fomentar el empleo.

La evolución de la sostenibilidad del sistema de pensiones augura dificultades sociales y supone la mayor amenaza para la estabilidad de unas cuentas públicas a las que la deuda y el déficit público hacen muy vulnerables.

Posponer la toma de decisiones no ayuda, porque el tiempo, que es lo que mismo decir la previsible evolución demográfica, no solo no va a resolver nada, sino que agravará el problema. Las soluciones que van contra la lógica económica y el ingenuo remedio de esperar una mejor coyuntura para tomar decisiones solo obligará a tomar medidas más drásticas y dolorosas.

El necesario refuerzo de la unidad de mercado que, fragmentada, es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta la actividad económica en España y muy especialmente la del sector industrial, y, lamentablemente, no figura entre las actuales prioridades políticas.

Muy al contrario, las crecientes tensiones y los desequilibrios territoriales que generan harán que se profundice en esa fragmentación normativa y fiscal, perjudicando la competitividad de las empresas la productividad y la creación de empleo.

En último lugar, pero sin que ello suponga menor relevancia, es imprescindible afrontar una reforma educativa, en todos los escalones y asegurarse de que, aparte de su idoneidad para resolver los problemas de adecuación de la formación a las necesidades reales de la economía y la sociedad, se desarrolle con el suficiente consenso para permitir que se mantenga en el tiempo de modo que pueda producir beneficios reales y duraderos sobre la estructura productiva y contribuya a reducir el desempleo.

No son estos los únicos desafíos. La energía, el tratamiento de la innovación, la política exterior que puede determinar el éxito de la internacionalización de la economía española, el sistema financiero, una reforma fiscal acorde a las exigencias de la competitividad, la liberalización pendiente en determinados servicios o la extensión de la digitalización a todo el tejido económico, también deberían estar en una agenda política que, sin embargo, se encuentra atrancada en cuestiones que postergan cuando no perjudican las de mayor trascendencia para la actividad productiva.